

¿PUEDE SUPERAR LA DEMOCRACIA VENEZOLANA SU CRISIS? EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLITICOS

*José E. Molina V.
Valia Pereira
Henry Vaivads*

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la crisis que atraviesa la sociedad venezolana, a fin de evaluar las posibilidades existentes para su superación, con especial énfasis en el papel de los partidos, tanto como factores de la crisis como de posibles instrumentos para su resolución. Comenzaremos haciendo un análisis de las características de la crisis y sus causas, centrándonos en los aspectos políticos y económicos; los cuales además de estar estrechamente relacionados, han tenido una incidencia decisiva. Luego se considerarán los efectos de la crisis sobre la legitimidad de la democracia como sistema y de las instituciones políticas. Se prestará particular atención al papel jugado por los partidos con respecto a la crisis política, y las consecuencias que ésta ha traído para ellos. Finalmente, en las conclusiones, se examinarán las perspectivas posibles para la democracia venezolana y los partidos, tomando en cuenta los cambios puestos de relieve por el proceso electoral de 1993.

1.1. Antecedentes políticos y económicos de la crisis

Hasta 1958 predominaron en Venezuela los régimenes dictatoriales, con breves períodos de ensayos democráticos, en gran medida mediatisados. El

predominio de gobiernos dictatoriales en ese lapso limitó las posibilidades de desarrollo autónomo de organizaciones propias de la sociedad civil.

En sentido estricto, los orígenes de los partidos políticos modernos en el país se sitúan entre la década de los treinta y la década de los cuarenta cuando se constituyen algunas de las principales organizaciones políticas¹ que todavía hoy juegan un papel protagónico en la vida del país².

La democracia venezolana ha atravesado por varias fases en su desarrollo. Su advenimiento a partir del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 se efectuó bajo condiciones de inestabilidad que se extendieron hasta finales de la década del sesenta, cuando el gobierno de Rafael Caldera (COPEI) emprende la pacificación del país en 1969. A esa fase puede considerársele como de consolidación de la democracia y en la misma se generaron las bases para el desarrollo futuro de la misma. El pacto institucional entre los más importantes partidos de la época, AD, COPEI y URD (excluyendo al Partido Comunista de Venezuela), y los sectores laborales, económicos y militares (su origen formal es el llamado pacto de Punto Fijo firmado en 1958), sirvió como mecanismo efectivo para enfrentar la inestabilidad y hacer viable la democracia. Desde entonces hasta ahora este pacto ha sido uno de los soportes fundamentales de la gobernabilidad democrática en el país.

La conjuración de la subversión y la organización del consenso a través de los valores de orden, estabilidad, no violencia, progreso, movilidad social y libertad, surtieron efectos positivos evidenciables en el rechazo de la población a la subversión y en la alta participación electoral.

Es así como en la década del setenta se observa en Venezuela un período de regularidad democrática, sin conflictos sociales relevantes y con un manejo eficiente de la negociación distributiva. Garante de tal situación, además del Pacto de Punto Fijo, fue la renta petrolera que se erigió como base del crecimiento nacional. Este papel económico fundamental fue estimulado por la nacionalización petrolera y las variaciones ascendentes de los precios internacionales del petróleo, lo cual elevó sustancialmente el ingreso del Estado venezolano y propició su consolidación como Estado interventor y protecciónista en lo económico y social.

1 Entre ellas: Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Unión Republicana Democrática (URD).

2 Es sólo en 1993 cuando partidos diferentes a los fundados en esa época ganan unas elecciones presidenciales (Convergencia Nacional y el Movimiento Al Socialismo apoyando la candidatura del Dr. Rafael Caldera).

Al asegurarse el Estado venezolano una cuantiosa fuente de ingresos con el control de las industrias básicas del país, se adjudicó también un elevado nivel de autonomía para la administración y regulación del conflicto social.

Esa autonomía de base rentista del Estado venezolano y los pactos constitutivos (Bracho: 1992) que dieron viabilidad al proyecto democrático a partir de 1958, legitimaron en el control del aparato del Estado a la élite política y a los partidos políticos. En lo sucesivo los partidos políticos desempeñaron su actividad penetrando todos los espacios de la sociedad, políticos, económicos y sociales en general, adjudicándose de manera exclusiva la representación y gestión de demandas. Son esos factores los que han llevado a algunos autores a definir la democracia venezolana como una “democracia de partidos” o “partidocracia” (Torres, 1984: 63).

A partir de 1975 (durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez) se empieza a manejar la tesis del desarrollo económico orientado a la exportación, lo cual implicó grandes inversiones públicas en infraestructura y desarrollo industrial (sobre todo empresas básicas) y se acude al financiamiento externo para ampliar la base de crecimiento nacional.

Desde 1983 (finales del gobierno de Luis Herrera Campins y gobierno de Jaime Lusinchi) en adelante empiezan a desarrollarse en el país las consecuencias negativas de la estrategia económica y social de base rentista petrolera, en razón de la disminución de los precios internacionales del petróleo y del condicionamiento que los organismos financieros y la banca internacional imponen al financiamiento externo. El ingreso nacional disminuye y el pago de la deuda externa se hace agobiante. Las medidas de ajuste recesivo empiezan a tomarse y los rasgos de la recesión económica hacen su aparición. En el gobierno de Luis Herrera se instala, como medida transitoria el control de cambio, para mitigar la crisis.

En el gobierno de Jaime Lusinchi (1984/89) se adoptan medidas económicas dirigidas a crear una bonanza artificial³. Como consecuencia se agotan las reservas internacionales, y se coloca al país en una crisis sin precedentes, que en el momento no logra ser captada en su magnitud por los intelectuales y políticos.

Puede decirse que desde 1983, a partir de la medida de control de cambio adoptada por el Presidente Luis Herrera, se inicia en el país la declinación de la base rentista distributiva que daba viabilidad a la democracia pactista que fundaba el

3 Se continúa con el esquema distributivo para no enfrentar costos políticos, y por entender a la crisis todavía como transitoria.

consenso en expectativas de bienestar y movilidad social, donde los arreglos clientelares constituían la principal forma de relacionamiento público con las organizaciones y los ciudadanos (Borges: 1992).

1.2. Incidencias políticas de la crisis económica

En enero de 1989 Carlos Andrés Pérez asume por segunda vez la presidencia de la república y para enfrentar la crisis adopta severas medidas económicas de ajuste restrictivo, dentro de un esquema económico neoliberal (denominado en el país “paquete económico”). Como consecuencia el país se ve estremecido por la “rebelión popular” del 27 y 28 de febrero de 1989: cuando se desata una ola de saqueos, violencia y muerte en diferentes regiones, sin antecedentes en la historia reciente venezolana.

Durante el proceso electoral del 88 Carlos Andrés Pérez, candidato de AD, y sus seguidores, promocionaron en el electorado la idea del regreso a la bonanza, asociándola a las ejecutorias del primer gobierno de Pérez (1974-79).

En esas condiciones, la candidatura de Pérez resultó ganadora en 1988, respaldado por un electorado esperanzado por regresar a la bonanza y a las políticas de bienestar. El desconocimiento de la magnitud de la crisis al final de la gestión del presidente Lusinchi hizo que éste dejara el gobierno con una alta popularidad, lo cual también benefició a Pérez. COPEI y su candidato Eduardo Fernández hicieron una débil oposición y el resto de los partidos no logró impactar al electorado.

El contraste entre las expectativas de bienestar alimentadas por el candidato de Acción Democrática durante su campaña, y la implantación inmediata de una política económica neoliberal, que asignó a los sectores populares y medios una carga muy pesada y adjudicó ventajas ostensibles a los grandes grupos económicos, originó una temprana quiebra de la credibilidad del gobierno.

Los sucesos sangrientos del 27 y 28 de febrero expresan una modificación del comportamiento político del venezolano, que antes canalizaba su inconformidad casi exclusivamente cambiando la dirección de su voto⁴ (Molina: 1988). A partir de allí queda evidenciada la posibilidad de que la inconformidad se exprese bajo formas no tradicionales, violentas, y en momentos no electorales.

4 De 1968 a 1983 el gobierno perdió siempre la elección presidencial. De allí que se dijera que el comportamiento electoral del venezolano se caracterizaba por el llamado “voto castigo” o la “ley del péndulo”.

La protesta no podía esperar al nuevo proceso electoral del 93 porque la desilusión fue temprana y contundente. Se tomó conciencia de la irreversibilidad de la crisis, lo desacertado del gobierno anterior de Acción Democrática y de la corrupción imperante en el mismo, pero ya no era posible resarcir tales daños mediante el voto castigo porque las elecciones se habían producido recientemente. Lusinchi y AD viven su impopularidad y el rechazo de la población extemporáneamente, durante el gobierno de Pérez. Esto se suma al descontento generado por el propio gobierno de Pérez al mantenerse inflexible en su conversión “neoliberal”⁵ y no actuar en forma convincente contra la corrupción.

A partir de ese período la pobreza comienza a incrementarse de una manera desconocida en el país y las clases medias pierden muchos de los beneficios que hasta entonces daban como ciertos. Según la información oficial difundida por la Oficina Central de Información (OCEI), el 55 % de la población vive bajo la línea de la pobreza, es decir, no obtienen los recursos indispensables para adquirir los bienes requeridos para el sostén del núcleo familiar (Pereira: 1993). Las diferentes fuentes de información pueden disentir en cuanto a la magnitud de los niveles de pobreza, en lo que hay coincidencia es en que la misma aumentó significativamente en los últimos años, y en particular a partir de la puesta en práctica del programa económico del Presidente Pérez en 1989. El descenso en el nivel de vida, produjo en la población un fuerte sentimiento de insatisfacción con respecto a las expectativas que habían generado sucesivos gobiernos democráticos, particularmente el electo para el período de 1989 a 1994. Se hizo presente el sentimiento de que la población fue despojada de algo que le pertenecía, que el manejo que se ha hecho de la política económica ha beneficiado a un sector muy pequeño y ha empobrecido a la mayoría de la población. Amplios sectores de las clases medias y populares han visto decepcionadas las expectativas que sucesivamente cifraron en los gobiernos electos democráticamente, esto obviamente tiene un peso importante dentro de la crisis política del país.

Es evidente que un sistema político que se sirva de los valores de bonanza, movilidad social y de la exclusión del ciudadano del medio público (ilusión de libertad y participación) como mecanismos de mantenimiento de la estabilidad,

5 Despues de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, los distintos sectores del país, incluido el medio oficial coincidieron en la necesidad de establecer medidas correctivas para la democracia que implicaban reformas significativas para el ordenamiento político del país, algunas de las cuales se llevan a la práctica muy débilmente y otras se omiten. En relación a las medidas económicas de compensación social, éstas no son acogidas por el gobierno. Solamente desarrolla programas sociales específicos, focalizados hacia los sectores de pobreza extrema.

necesita producir permanentemente las condiciones necesarias para que la población se satisfaga en su mundo privado. Al producirse bajos rendimientos en la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos, se afecta la confianza y el apoyo a las instituciones, y por consiguiente la legitimidad del sistema (Pereira: 1992).

La crisis económica, aunada a otros factores que analizaremos más adelante, han abierto el camino a una crisis de legitimidad, debido a que se ha reducido la credibilidad y el apoyo popular a instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema político.

2. Democracia y crisis de legitimidad

La democracia venezolana continúa teniendo un respaldo cercano al 80 %, tal como se desprende de un estudio de opinión pública efectuado por Datanalysis en 1990 (Torres: 1991). En una encuesta reciente de Datanalysis, se le preguntaba a los ciudadanos sobre el tipo de gobierno que prefería, se le daban las alternativas: Democracia, Dictadura Militar, u otro. El 92 % señalaba que prefería la democracia, y sólo el 4 % resultó partidario de una dictadura militar (Pereira: 1993). Son cifras abrumadoras en favor de la democracia. Sin embargo, resulta claro, a la luz de los acontecimientos recientes, que una opinión general favorable no es suficiente para garantizar la estabilidad de la democracia. El que sea considerada por una amplia mayoría como la mejor forma de gobierno para el país, no garantiza por sí misma su estabilidad.

A este respecto es necesario tomar en cuenta la actitud de la opinión pública respecto a las instituciones por medio de las cuales funciona la democracia. De ella depende también el grado de solidez del sistema político. Para determinar la actitud de respaldo o rechazo hacia las instituciones concretas de la democracia en Venezuela, en primer lugar, centraremos la atención en el gobierno como tal. ¿Cuál es la posición de la población en relación al gobierno? En la encuesta DOXA/CIEPA de 1993, sólo el 29 % de los encuestados manifiesta que tiene confianza en el gobierno⁶. Torres, basando su estudio en varias encuestas nacionales, realizadas de 1973 a 1990, ha observado una sensible pérdida de confianza en el gobierno como institución (Torres: 1991), y también una disminución en el nivel de opinión favorable a la gestión de gobiernos específicos. Mientras que para 1973 el 38% consideraba que el gobierno lo había hecho bien o muy bien, para 1978 este porcentaje fue de 28%, para 1983 es de 13%, para 1987 es de 20%, y para 1990 ha

6 La encuesta DOXA/CIEPA fué realizada bajo la dirección del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de La Universidad del Zulia durante junio de 1993. Se realizaron 1500 entrevistas a nivel nacional.

descendido a 11% (Torres: 1991). Es decir que progresivamente ha ido creciendo la opinión negativa respecto al gobierno de turno. Esta situación sugiere que, más allá de la evaluación específica del gobierno del momento, ha habido en Venezuela un fenómeno de acumulación de la insatisfacción y del descontento.

Para el resto de las instituciones la situación no es mejor, solamente el 34% manifiesta confianza en el Poder Judicial, el 39 % en la Fiscalía General de la República, el 29 % en la Contraloría, el 30 % en el Congreso, el 32 % en la Policía. Como vemos, los otros dos poderes, el Judicial y el Legislativo no llegan al 40% de confianza, de modo que no puede decirse que su actuación pueda haber compensado la imagen negativa del Ejecutivo⁷. Es interesante destacar como el apoyo a estas instituciones resulta muy inferior a la confianza manifestada en otras como las Fuerzas Armadas (53%), las Universidades Nacionales (65%) y en la Iglesia (71%) (Encuesta DOXA/CIEPA).

Los partidos políticos no están, ante la opinión pública, mejor que el resto de las instituciones, por el contrario, son en Venezuela una de las instituciones con opinión menos favorable, y seguramente la que ha venido progresivamente desprestigiándose más, no sólo algunos partidos en concreto, sino en general los partidos políticos como institución. Ante la pregunta sobre si los partidos están controlados por un grupito que sólo se ocupa de sus propios intereses, formulada en una encuesta nacional de 1990 (Datanalysis: 1990) el 89 % afirma que es así. En la encuesta CIEPA/DOXA 1993, encontramos que para el 82 % de la población, los partidos son responsables de la corrupción en el país. La pregunta sobre si los partidos políticos sólo se ocupan de ganar elecciones y de nada más, la encontramos en tres encuestas nacionales, la de Martz y Baloyra en 1973 (Baloyra y Martz: 1979), Baloyra y Torres en 1983 (Torres, 1985: 56) y Datanalysis 1990. La respuesta a esta pregunta nos da un indicador de cuál ha sido la evolución de las actitudes de la población frente a los partidos en Venezuela. En 1973 el 69 % de los encuestados decía que los partidos solo se ocupan de ganar elecciones; para 1983 la situación era prácticamente idéntica, el 68 % afirmó en el mismo sentido. Para 1990 encontramos un cambio significativo, el 87 % de la población considera que los partidos políticos se ocupan de ganar las elecciones y absolutamente nada más. Con base en esta información puede afirmarse que los partidos han sufrido en Venezuela un importante deterioro en su prestigio, y que la actitud de la población es, en general, francamente negativa hacia ellos.

7 La actitud frente al gobierno, antes referida, debe entenderse por la manera como se formulan las preguntas como relativa al Poder Ejecutivo.

En medio de la grave crisis económico-social del país y del escaso apoyo que la opinión pública manifiesta hacia las instituciones fundamentales de la democracia, particularmente a los partidos políticos, ocurren entre 1992 y 1993 tres sucesos de especial importancia para el desenvolvimiento de la democracia, ellos son dos intentos de golpes de estado (4 de febrero y 27 de noviembre de 1992) y la suspensión de sus funciones del Presidente Carlos Andrés Pérez por parte del Congreso Nacional, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia. El ex-Presidente Pérez es acusado por el Fiscal General de la República de malversación de fondos de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Esta es la primera suspensión de un Presidente en sus funciones en el período democrático.

Los intentos de golpe de estado evidencian que las Fuerzas Armadas presentan resquebrajamientos en su adhesión al sistema democrático, y en su respeto al pacto institucional. La existencia de facciones en todas las fuerzas es un hecho innegable, así como también lo es la presencia de descontentos internos por el manejo partidizado de los asuntos de las distintas fuerzas. En sus discursos los principales exponentes de los grupos golpistas expresaron como justificación de sus acciones el rechazo a las distorsiones que ha generado el sector político dominante en la democracia, a la corrupción y los malos manejos gubernamentales que han llevado al país a la crisis económico-social. Como era de esperar, estos planteamientos, aunque no la posibilidad de un gobierno militar, fueron vistos con simpatía por la población. Esta se sintió igualmente atraída por la audacia y aparente desprendimiento personal de esos militares. Los golpistas del cuatro de febrero son percibidos como proponentes de cambios políticos favorables a los intereses populares, aún cuando sus planteamientos ideológico-políticos son escasos y confusos.

Durante los dos intentos de golpe de estado, la población ofreció sólo un respaldo pasivo a la democracia. No salió a la calle ni en favor de los golpistas ni en apoyo a la democracia, sólo algunos sectores civiles minoritarios participaron en tales asonadas.

Es ilustrativo contrastar lo ocurrido en 1992, con la actitud de la población al comienzo de la actual etapa democrática a partir de 1958. También entonces se presentaron varios intentos de golpes de Estado. En aquella ocasión, la población salió a la calle a respaldar la democracia ante el llamado de sus dirigentes. Había un manifiesto fervor en apoyo a la democracia y en contra de los movimientos golpistas. Ese fervor no se hizo presente en los intentos de golpes de 1992.

A pesar del clima de inestabilidad que produjeron en el país los dos intentos de golpes militares y de la frecuente protesta social, se realizaron en el país las

elecciones municipales y de gobernadores en diciembre de 1992. En esos comicios se eligieron los veintidós gobernadores de estado, doscientos ochenta y dos alcaldes, los miembros de los concejos municipales y los representantes ante las juntas parroquiales. En estas elecciones los partidos de oposición logran victorias muy importantes (Molina y Pérez: 1993). Hubo varios reclamos de fraude. En respuesta a estos, la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir las elecciones en cuatro estados⁸, y hay otros dos que están pendientes de decisión sobre ese mismo particular. A pesar de tales reclamaciones, el que se hayan producido cambios importantes, y que el partido de gobierno haya sufrido una derrota muy grande, sirvió para incrementar algo la percepción de las elecciones como instrumento real de cambios, aún cuando todavía la misma se mantiene en niveles bajos. En efecto, en la encuesta DOXA-CIEPA 1993, administrada en junio de ese año, sólo el 43% considera que no es cierto que “gane quien gane las elecciones todo sigue igual”. Es decir, sólo el 43% está convencido de la efectividad de las elecciones como instrumento de cambio. Sin embargo, aún cuando el nivel de entusiasmo por las perspectivas de transformación por la vía electoral no puede decirse que sea excelente, si puede afirmarse que para 1993 fue superior al año anterior. Las elecciones de 1992, crearon el escenario necesario para contribuir a que 1993, año de las elecciones presidenciales y parlamentarias, transcurriera dentro de un clima de moderado optimismo en cuanto a las expectativas de transformación institucional mediante el voto.

Todo 1993 estuvo sembrado de rumores de golpe, de cierta incertidumbre, pero también adornado por la expectativa de que las elecciones podrían ser un instrumento para el cambio. Lo cual sin duda fue un soporte muy significativo de la estabilidad democrática. Sin el señalado incremento de la confianza en la capacidad del sistema para producir cambios, hubiera sido mucho más difícil llegar a las elecciones de diciembre de 1993. Por ello, a pesar de las conjeturas favorables a la desestabilización política que se generaron en el país a la víspera de la decisión de suspensión del ex Presidente Pérez, y durante el gobierno de transición del Presidente Velásquez, la situación transcurrió dentro de una relativa tranquilidad⁹, que finalmente hizo posible el proceso electoral de 1993.

8 En dos de ellos se ordenó repetir las elecciones totalmente. Esto se hizo en 1993. En los otros dos la repetición ordenada fué parcial.

9 Ocurrieron algunas acciones terroristas que presuntamente fueron provocadas por un grupo de individuos interesados en crear situaciones de inestabilidad, para favorecer sus inversiones en la bolsa de valores y eventualmente generar condiciones para un golpe de estado conservador.

Como hemos visto, la actitud de la opinión pública venezolana frente a la democracia y sus instituciones podría resumirse así: elevado apoyo a la democracia como régimen político, conjuntamente con un descontento manifiesto con la actuación de las instituciones mediante las cuales la democracia funciona. Este es un esquema similar al que encontramos en otros países latinoamericanos.

¿Cuál es la consecuencia práctica que esta situación acarrea para la estabilidad de la democracia? Por una parte, que la población separe la evaluación de la democracia como sistema, de la evaluación de las instituciones concretas mediante las cuales ésta se materializa, y eso es positivo. Es un signo de madurez democrática, indicador del valor significativo que la democracia ha adquirido para la población, independientemente de la forma en que actúe cualquier gobierno en particular. Ello contribuye a la estabilidad democrática porque el rechazo a unos gobernantes, o a unas políticas en particular, no conllevará a un rechazo a la democracia. Sin embargo, el desencanto con las instituciones democráticas y una evaluación negativa fuerte y persistente de los gobiernos electos en la democracia, aún cuando no se manifieste en un rechazo expreso a la misma, podrían debilitar su apoyo activo. A pesar de que se mantenga un apoyo pasivo, la voluntad de los electores por defender la democracia podría verse disminuida, afectando la estabilidad del sistema que vería así reducida su capacidad de respuesta frente a cualquier intento de derrocarlo. Este parece haber sido el efecto para Venezuela como consecuencia de la antes descrita actitud de la opinión pública.

La posición indiferente de la población en las dos asonadas golpistas sugiere que en situaciones de apoyo generalizado a la democracia, pero de descontento con las instituciones mediante las cuales ella funciona, la población, aunque mantiene su preferencia por la democracia (respaldo intelectual o pasivo), tiende a perder incentivo para defenderla activamente. La democracia pierde el apoyo activo. Si bien hay un apoyo intelectual, pasivo, se pierde el potencial de apoyo activo. Para ilustrar la idea, podríamos decir que el sistema entra en una situación de inmunodeficiencia. La democracia pierde algunos anticuerpos fundamentales (el respaldo popular activo) frente a los posibles intentos de derrocarla. Entra en una situación de debilidad en cuanto a sus defensas frente a ataques exteriores. Lo que obviamente crea un clima relativamente propicio para este tipo de atentado, ya que no va a haber una reacción activa por parte de la población en contra de ellos.

A esto podemos agregar que el apoyo a la democracia, se combina para un sector importante, con la opinión de que puede haber circunstancias en que un golpe de estado se justifique. En efecto según una encuesta de DATOS, realizada en junio de 1993, el 52% señala que se pueden justificar golpes de estado en ciertas

ocasiones; y el 48% expresa que nunca se pueden justificar. Si bien esto ha sido interpretado como un probable apoyo a una medida excepcional para restablecer la democracia contra un gobierno electo pero que haya devenido notoriamente ilegítimo, refuerza también la idea de que ante eventuales ataques a la democracia no habría apoyo popular activo hacia las instituciones y, por el contrario, la población en general se mantendría a la expectativa.

3. Los partidos y la crisis

En Venezuela el cuestionamiento a los partidos políticos no es un fenómeno novedoso, ya a principios de la década de los 80 una investigación (Torres: 1985) mostró que existía un elevado nivel de descontento de la población con respecto a la forma como los partidos políticos actuaban. Sin embargo, en la actualidad es posible apreciar una diferencia de orden cualitativo en la crítica dirigida hacia los partidos, en tanto que la misma apunta hacia un aspecto central como lo es la legitimidad de este tipo de organización, en términos de su papel como mediación natural de la relación Estado/sociedad, vale decir, entre el Estado y los ciudadanos.

De acuerdo a nuestro modo de entender el problema, la crisis de los partidos políticos en Venezuela responde a los siguientes factores:

La causa fundamental de esta pérdida de prestigio de la institución partidista ha sido, la ineeficacia de los gobiernos elegidos durante el período democrático. Gobiernos de los principales partidos. Ineficacia en el sentido de que estos gobiernos no han respondido satisfactoriamente, a las expectativas de la mayoría de la población. Por ello, ninguna otra solución distinta a que los partidos y los gobiernos democráticos de alguna manera respondan a estas expectativas parece capaz de lograr recuperar ese prestigio.

También la corrupción ha sido un elemento altamente corrosivo del prestigio de las maquinarias partidistas en Venezuela. Importantes miembros de estas organizaciones (fundamentalmente de los partidos que han gobernado nacionalmente) se han visto involucrados en escándalos judiciales por estos motivos. Algunos son prófugos de la justicia. Los casos más sonados han comprometido incluso a los dos últimos ex-presidentes de la República, cuyo juicio ha sido autorizado tanto por la Corte Suprema de Justicia, como por el Congreso de la República.

Los partidos políticos venezolanos han desarrollado un tipo de vinculación partido/militantes o simpatizantes de naturaleza marcadamente clientelar, en el sentido de que la relación con la organización ha estado condicionada predominantemente por la posibilidad de recibir ciertas prebendas, tales como la ubicación en

cargos públicos, la obtención de becas, de viviendas, de créditos blandos, etc. Esta situación parece haber alcanzado su umbral máximo de expansión en el contexto social actual caracterizado por una profunda crisis económica. La actitud justificadamente negativa de la población frente a este tipo de corruptelas ha contribuido en medida significativa a acentuar la desconfianza y reducir el apoyo popular a la institución partidista hasta los niveles que hemos señalado anteriormente.

Otro aspecto a destacar ha sido el proceso de oligarquización que se ha producido al interior de los partidos (Michels: 1969). En el caso de los partidos políticos venezolanos este fenómeno apunta hacia lo que periodísticamente se ha denominado "la cogollocracia". Expresión esta que hace alusión a la ausencia de democracia al interior de los partidos. La carencia de democracia interna ha llegado en ocasiones a convertirse en fuente de conflictos públicos y, por consiguiente, en un factor más de descrédito para las organizaciones políticas.

La descomposición de los partidos, tanto en lo que se refiere a su democracia interna, como a su integridad en el manejo de la administración pública, ha estado asociada para algunos al proceso de desideologización que han experimentado. Los partidos venezolanos, particularmente los que hasta ahora han dominado la escena, tienden a asemejarse más a empresas mercantiles que a instrumentos de lucha por algún ideal.

En este contexto, caracterizado por la crisis interna de los partidos y la conformación de una matriz de opinión negativa hacia los mismos, se ha producido un proceso de resquebrajamiento de las lealtades partidistas, tal como puede observarse en el cuadro número 1. En efecto mientras que el porcentaje de quienes manifiestan ser militantes o simpatizantes muestra un descenso del 48.7% en 1973 al 32.4% en 1990; los independientes aumentan del 19.2% al 47% en el mismo período.

Cuadro 1
Evolución de la vinculación de los ciudadanos
con los partidos políticos en Venezuela

	1973	1983	1990
Militantes/Simpatizantes	48.7	38.4	32.4
Independientes	19.2	38.0	47.0
No interesados	32.1	23.6	20.6
Total (%)	100	100	100

Fuentes: Torres (1985) y Datanalysis (1990).

El debilitamiento de los vínculos partidistas, tal como lo indican los porcentajes mostrados anteriormente nos sugiere que como consecuencia de la crisis de los partidos se está operando un proceso de ruptura de las líneas de base que vinculan al ciudadano con los partidos, lo cual sin lugar a dudas favorece por un lado, la personalización del sufragio y por el otro genera una situación de volatilidad electoral con capacidad para alterar la composición tradicional del sistema de partidos, tal como ocurrió en las elecciones de diciembre de 1993.

4. Conclusión: perspectivas de los partidos y la democracia venezolana

Con base en los argumentos que hemos presentado se puede señalar que el avance o deterioro de la estabilidad democrática en Venezuela depende en primer lugar y fundamentalmente de la eficacia de los próximos gobiernos frente a las expectativas de la población. Es esa eficacia la que va a determinar realmente el grado de estabilidad de las instituciones democráticas en Venezuela. Entendemos por eficacia de la gestión, tal como se indicó arriba, que ésta sea vista por la opinión pública mayoritaria, como positiva en la resolución de los problemas fundamentales del país. En la medida en que no haya eficacia, en la medida en que la población sienta que sus aspiraciones no están satisfechas, seguirá el clima de apatía en cuanto a la defensa de las instituciones democráticas, independientemente de que los niveles de apoyo a la democracia como sistema de gobierno sigan apareciendo muy altos en las encuestas.

En cuanto a los partidos, mucho depende igualmente de la eficacia de los gobiernos democráticos; sin embargo, la recuperación de su prestigio está también condicionada a que se corrijan los vicios a los cuales se ha hecho referencia, tales como la corrupción y el clientelismo. En los partidos tradicionales el grado de penetración de estos males es tal que erradicarlos no será nada fácil, aún cuando hubiera voluntad de hacerlo. Para las organizaciones que han adquirido protagonismo nacional con las elecciones de 1993 (Causa R, Convergencia y el Movimiento al Socialismo), tampoco será sencillo evitar la corrupción y el clientelismo; de modo que debe esperarse para determinar si la institución partidista recuperará su prestigio en el país.

Venezuela está viviendo un proceso marcado de declinación de la partidocracia. Los partidos políticos van a ser cada vez menos influyentes en aquellas áreas de la sociedad que no estén directamente vinculadas a la política; han comenzado a surgir nuevos movimientos sociales, particularmente las asociaciones de vecinos, que han recuperado terreno como organizaciones de ciudadanos no partidizadas. El clima de opinión predominante hace esperar un avance progresivo de las organizaciones no partidistas.

La institución de los partidos subsistirá como un elemento esencial de la vida democrática; pero no necesariamente permanecerá en la misma forma en que la hemos conocido hasta ahora. El desarrollo de la personalización de la política, caracterizado por el hecho evidente de que para la elección de gobernadores han sido decisivas las características individuales de los candidatos, desplazando en importancia en algunos casos a la filiación partidista, sugiere que en un futuro cercano los liderazgos sociales competirán con fuerza por el control interno de las organizaciones partidistas contra los liderazgos de base clientelar. De acentuarse la personalización como fundamento de la decisión de los electores, es de esperar que tiendan a solidificarse o a repuntar aquellas organizaciones donde estos liderazgos de masas desplacen, por lo menos de las candidaturas, a los caudillos internos.

El marcado descenso de Acción Democrática y COPEI en las pasadas elecciones nacionales de diciembre de 1993, como se observa en el cuadro 2, está vinculado parcialmente a la resistencia de sus caudillos internos a darle paso a los líderes más populares. Por otra parte, el afianzamiento del MAS está sustentado, casi exclusivamente, en el apoyo a liderazgos personales exitosos que han logrado neutralizar la pérdida de atractivo de la organización como tal. Convergencia Nacional ha surgido como una fuerza importante sobre los hombros del prestigio del Presidente Rafael Caldera; su futuro seguirá dependiendo, por los momentos, del apoyo popular a este líder. La Causa R es de los partidos recientemente exitosos, el único que no podría decirse que está mayoritariamente soportado por liderazgos personales, aún cuando su máximo dirigente, el Gobernador del Estado Bolívar, Andrés Velásquez tiene un sólido respaldo personal.

Cuadro 2
Votación parlamentaria en las elecciones
nacionales de Venezuela 1988 y 1993

Partido	Votación 1988*	Votación 1993**
A.D.	43.2%	23.3%
COPEI	31.1%	22.6%
MAS	10.2%	10.8%
La Causa R	1.7%	20.7%
Convergencia	-	13.6%
Otros	13.8%	9.0%

* La votación es la obtenida para cargos parlamentarios. En la elección de 1988 un sólo voto abarcaba simultáneamente la Cámara de Diputados del Congreso, el Senado del Congreso y la asamblea legislativa del estado.

** La votación es la obtenida para la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

Fuente: Dirección de Estadísticas del Consejo Supremo Electoral.

Causa R, pasa de menos del dos por ciento de los votos en 1988 a más del veinte por ciento en 1993. Lo logra por haber sido capaz de liderar una parte importante del descontento social, y servirle a muchos votantes como instrumento para expresar su rechazo a las fuerzas tradicionales. Sus votantes no son seguidores estables todavía, ya se ha demostrado que es vulnerable a los liderazgos personales prestigiosos de otros partidos¹⁰, de modo que su futuro también parece depender en parte de que pueda desarrollar líderes ampliamente populares; a menos que sea capaz de mantener un respaldo significativo al partido como tal, sin embargo, el que logró en 1993 se debió a circunstancias coyunturales¹¹. La Causa R, a diferencia de Acción Democrática o COPEI, no ha sido beneficiario de un proceso de socialización política en su favor. Tampoco es percibida como representante de los intereses de un sector social específico, ni presenta una ideología particularmente clara en cuya aceptación pueda cifrar esperanzas de perdurabilidad. Por ello, pareciera depender para su consolidación, en parte importante, del liderazgo social que puedan alcanzar sus dirigentes.

Venezuela está viviendo también, al igual que otros países latinoamericanos, y por las razones que hemos mencionado de descontento frente a los partidos tradicionales, una situación de volatilidad electoral, en la cual las antiguas identificaciones partidistas, los lazos que unieron a los ciudadanos con los partidos

-
- 10 En las elecciones de 1993, ganó ampliamente las elecciones en el área de Caracas. Ganó con dirigentes poco conocidos en los circuitos uninominales. Sin embargo perdió en dos de ellos donde se postularon líderes con prestigio nacional, uno del MAS y otro de COPEI. Esto por cierto sugiere que líderes individuales de alto prestigio pueden superar la tendencia a votar por el partido mayoritario del sector, el municipio o el estado. Esto tiene una relevancia moderada para el caso de los parlamentarios, porque difícilmente se conseguirán suficientes dirigentes de alto prestigio como para afectar significativamente al partido mayoritario contrario; sin embargo, puede ser decisivo para las elecciones a gobernador, alcalde e incluso presidente de la república. En el principal estado del país, el Estado Zulia, donde por renuncia del titular se eligió gobernador en diciembre de 1993, el principal partido COPEI ganó fácilmente la elección para cuerpos deliberantes, su candidato presidencial superó a los demás en el estado por un margen apreciable, pero perdió la elección a gobernador ante una candidata de carisma, postulada por la tercera fuerza parlamentaria del estado (M.A.S)
- 11 La Causa R logró, debido a su actuación durante el 4 de febrero de 1992 (día del primer intento de golpe de estado) y posteriormente, compartir con el Presidente Rafael Caldera, la posición de depositario del sentimiento popular de protesta. Este partido se convirtió, sobretodo en los estados centrales, en el vehículo del descontento. El voto por este partido pareció ser más una manera de expresar profunda insatisfacción, que de escoger una determinada plataforma política.

tradicionales, se han venido resquebrajando; vivimos dentro de una situación que dentro de la teoría del comportamiento electoral podría clasificarse de desalineamiento (Harrop y Miller 1987: 78-84; Molina y Pérez 1993: 85).

Las elecciones de diciembre de 1993 significaron una modificación muy significativa del sistema de partidos. De una situación de amplio dominio de dos partidos reinante desde 1973, se pasa a una donde encontramos cinco fuerzas con relevancia parlamentaria y electoral. Desde 1973 hasta 1988, AD y COPEI concentraron más del 70% de los votos para el Congreso Nacional. La tercera fuerza, en las cuatro elecciones del período, nunca sobrepasó el 11%. En 1993, en cambio, AD y COPEI no superan en conjunto el 50%, hay una tercera fuerza por encima del 20% (Causa R), y otros dos partidos superan el 10% (MAS y Convergencia). El sistema de partidos reinante desde 1973, caracterizado por la presencia de dos fuerzas políticas dominantes, las únicas con opción de gobierno, se rompe, y entramos en un período de transición que al parecer se caracterizará por una alta volatilidad electoral, al menos durante un tiempo.

Cuadro 3
Comparación entre el voto presidencial y parlamentario
conjunto de los dos principales partidos para las
elecciones venezolanas desde 1958

Elección	Dos primeros	Votación presidencial partidos	Votación parlamentaria conjunta
1958	AD - URD	79.84%	76.21%
1963	AD - COPEI	52.98%	53.53%
1968	AD - COPEI	56.32%	49.58%
1973	AD - COPEI	84.00%	74.68%
1978	AD - COPEI	88.58%	79.48%
1983	AD - COPEI	87.88%	78.58%
1988	AD - COPEI	92.84%	74.30%
1993	AD - COPEI**	45.34%	45.90%

Fuente: Consejo Supremo Electoral.

* Se trata de la votación conjunta de AD y COPEI para la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

**La elecciones presidenciales las ganó el Dr. Rafael Caldera con base en la votación de Convergencia (17%), el MAS (10.6%) y otros partidos menores que lo apoyaron. Sin embargo, como partidos individuales las votaciones más elevadas fueron de AD (23.23%) y COPEI (22.11%).

Nota: La votación sumada de los partidos se refiere a los porcentajes logrados por ellos individualmente, sin sus aliados presidenciales o parlamentarios.

El régimen de gobierno presidencial, con elecciones bajo el sistema de mayoría relativa en una sola vuelta, estimulará la reconstitución del sistema de partidos alrededor de dos fuerzas políticas dominantes o dos bloques de partidos. De ser éste el caso es muy pronto para saber si se tratará de los dos partidos tradicionales, de las fuerzas emergentes, o de nuevas organizaciones. En todo caso, no es ineluctable el retorno a un sistema de base bipartidista, ya que el sistema electoral es un factor importante, pero no el único. Tampoco es previsible en este momento si el tiempo de duración del período de transición y volatilidad será largo o breve.

Es probable que las organizaciones políticas que emergan de éste proceso sean menos rígidas, con un mayor acento en el liderazgo social personalizado. Es decir, partidos donde la popularidad externa de los líderes tendrá un peso mucho mayor en la jerarquía interna.

La democracia venezolana, cabalgando sobre una fuerte crisis económica, ha entrado en un proceso de cambios. Se han resquebrajado las lealtades partidistas tradicionales, y con ello el sistema de partidos ha comenzado a transitar un período de inestabilidad. El desenlace está sujeto a diversas contingencias y no parece predecible de antemano. La posibilidad de que se recupere la credibilidad y el apoyo activo de la población dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones, especialmente los partidos, para deslastrarse de los problemas que se han señalado en este trabajo, particularmente del clientelismo y la corrupción, así como de que se eleve sustancialmente el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a la acción de los gobiernos democráticos.